



Texto inédito de una ponencia expuesta en las Jornadas regionales Henri Capitant, diciembre de 2006. Borrador para fines docentes. No hacer circular.

CONTRA UNA PRESUNCIÓN GENERAL DE CULPA POR EL HECHO PROPIO

Mauricio Tapia R.

Profesor de derecho civil

Departamento de Derecho Privado de la Universidad de Chile

INTRODUCCIÓN

1. Probablemente el desinterés por el estado subjetivo del agente condujo al legislador, y en menor medida a la jurisprudencia, a presumir el comportamiento negligente.

Las presunciones de culpabilidad tienen una larga historia (*res ipsa loquitur*) y se han aplicado tanto en el ámbito de la responsabilidad por el hecho propio (daños producidos por el manejo de armas de fuego, por ejemplo), como por el hecho ajeno (responsabilidad por el hecho de dependientes, por ejemplo).

2. En materia de responsabilidad por el hecho propio, una antigua tesis (también presente en el derecho colombiano que adoptó el Código de BELLO¹) afirma que el artículo 2329 del Código Civil establece una presunción general de responsabilidad por culpa: *"por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta"*.

¹ Aunque la jurisprudencia colombiana parece inclinarse por la teoría de que el artículo 2356 del Código Civil colombiano (art. 2329 del Código Civil chileno) contiene una hipótesis de responsabilidad objetiva en actividades peligrosas.

3. Una parte importante de la doctrina ha insistido en la existencia de esta presunción general de culpa por el hecho propio (como Calos DUCCI², Arturo ALESSANDRI³ y Enrique BARROS⁴), y la jurisprudencia, ha considerado que este artículo sólo repite la norma del artículo 2314, aunque en algunas contadas y excepcionales sentencias ha aceptado esta interpretación⁵.

Esta presunción de culpa se aplicaría no sólo en actividades peligrosas, sino en otras en que el daño no pueda sino ser atribuido a la acción del agente (*res ipsa loquitur*): "*cuando el daño proviene de un hecho que, por su naturaleza o por las circunstancias en que se realizó, es susceptible de atribuirse a culpa o dolo del agente, por ejemplo, un choque de trenes*"⁶.

4. Desde ya, cabe la pregunta de la conveniencia de insistir en establecer una presunción tan amplia en un medio jurisprudencial como el chileno, que se ha resistido sistemáticamente a disciplinar las condiciones de la responsabilidad civil. Como expondré, su utilización extensiva podría incluso, al menos teóricamente, generalizar la inversión de la carga de la prueba a un extremo en que se podría preguntar si no se trata en verdad de una vía para crear una regla general de responsabilidad estricta.

5. Por esto, en la primera parte de esta exposición se examinarán cuáles son los argumentos que se han esgrimido para sostener esta posición y cuáles serían los efectos de esta supuesta presunción **(I)**. A continuación, en la segunda parte se refutarán tales argumentos, sosteniendo que una presunción general por el hecho propio no tiene justificación teórica ni práctica, y que puede ser una regla peligrosa para el medio nacional **(II)**.

² En su memoria de prueba, *Responsabilidad civil (ex-contractual)*, tesis, Santiago, El Imparcial, 1936, p. 134.

³ V. en especial "Une nouvelle interprétation de l'art. 2329 du Code civil chilien", in *Etudes de droit civil à la mémoire de Henri Capitant*, París, Dalloz, 1939, p. 9; y, *De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil chileno*, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2005, reimpresión, p. 212.

⁴ *Tratado de responsabilidad civil extracontractual*, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2006.

⁵ Puede revisarse una sentencia reciente que ha concluido claramente en este sentido: Corte de Apelaciones de Santiago, 7 de septiembre de 2000, RDJ, T. XCVII, sec. 2ª, p. 65.

⁶ Alessandri Arturo, *De la responsabilidad...*, op.cit., p. 212.

I. ARGUMENTOS ESGRIMIDOS A FAVOR DE LA PRESUNCIÓN GENERAL DE CULPA POR EL HECHO PROPIO

6. La presunción ha sido construida por sus partidarios a partir del texto del artículo 2329 del Código Civil.

La primera parte de esta norma expresa que *“todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser indemnizado por ésta”* (2329 inciso 1°). La segunda parte señala tres conductas típicas en que esa regla recibe especial aplicación: el que dispara imprudentemente un arma de fuego; el que remueve las losas de una acequia o cañería en calle o camino, sin las precauciones necesarias para que no caigan los que transitan por allí de día o de noche; el que, obligado a la construcción o reparación de un acueducto o puente que atraviesa un camino, lo tiene en estado de causar daño a los que transitan por él (2329 inciso 2°).

Esta enumeración del segundo inciso no es exhaustiva, según la jurisprudencia⁷. Así, ha considerado como reveladores de negligencia los derrumbes que durante la demolición de un edificio causan daños a terceros⁸; la muerte de un transeúnte causada por una línea eléctrica extendida en condiciones peligrosas⁹; el accidente provocado por un pozo descubierto sin señales de prevención¹⁰; el volcamiento de un carro de ferrocarril por mal estado de la vía férrea¹¹.

⁷ Así se ha fallado que “este precepto no sólo cabe aplicarlo a los tres casos que enumera pues estos están señalados sólo a vía ejemplar y sin excluir otras situaciones”, Corte de Concepción, 25.1.2002, confirmada por la CS [cas. fondo], 7.5.2002, RDJ, T. XCIX (2002), sec. 5ª, 104 (112).

⁸ CS, 13.1.1937, RDJ, T. XXXIV (1937), sec. 1ª, 201.

⁹ CS, 14.6.1945, RDJ, T. XLIII (1946), sec. 1ª, 26.

¹⁰ Corte de Valparaíso, 3.12.1948, confirmada por la Corte Suprema [cas. fondo] sin referirse a esta materia, 4.8.1952, RDJ, T. XLIX (1952), sec. 1ª, 281.

¹¹ Corte de Santiago, 17.6.1941, confirmada por la CS [cas. forma y fondo] sin referirse a la materia, 27.8.1942 y 3.12.1943, RDJ, T. XLI (1944), sec. 1ª, 430. Asumiéndose esta interpretación se ha fallado que “el citado artículo 2329 no se limita a dogmatizar acerca de la necesidad de los elementos subjetivos de malicia o negligencia para imponer responsabilidad, sino que se anticipa a dar por establecida la concurrencia de los elementos necesarios para imponer dicha responsabilidad cada vez que una persona sufra un daño que constituya la razonable consecuencia de haberse ejecutado un hecho o dejado de cumplir un deber y tal acción u omisión es susceptible de perjudicar a terceros”, Corte de Valparaíso, 3.12.1948, confirmada por la Corte Suprema [cas. fondo] sin referirse a esta materia, 4.8.1952, RDJ, T. XLIX (1952), sec. 1ª, 281 (283) ;

Según notas de Andrés Bello al Proyecto de Código Civil de 1853, esta norma tiene su origen en las leyes 6, 7, 8 y siguientes del título XV, Partida VII de Las Siete Partidas. Las Siete Partidas contienen los siguientes ejemplos: se hace responsable de los daños causados a hombres o animales domésticos por trampas ('cauas, foyas o cepos') colocadas en lugares donde circulen usualmente hombres y rebaños; de los perjuicios que producen rebaños en estampida; y, de los incendios producidos por la quema de paja o de madera 'en tiempo de viento', entre otras circunstancias. Se trata de daños que se deberían a la acción u omisión de un tercero y que pueden ser evitados si se emplea el debido cuidado.

Como se expuso, la jurisprudencia ha considerado mayoritariamente que el artículo 2329 sólo era una reiteración de la norma del artículo 2314, cuya única peculiaridad consistía en citar algunos ejemplos o casos de aplicación del principio general de responsabilidad por culpa.

7. Los argumentos a favor de esta posición, planteados particularmente por el Decano Arturo Alessandri y recogidos por Enrique Barros, pueden sintetizarse en los siguientes:

(i) Desde un punto de vista exegético, la ubicación del artículo 2329, inmediatamente después de las normas que establecen presunciones de culpabilidad por el hecho ajeno (artículos 2320 y 2322) y por el hecho de las cosas (artículos 2323 a 2328), y el enunciado inicial de la norma, que hace referencia a una regla general, que puede ser entendida como una regla de clausura del sistema de presunciones que contempla el Código Civil.

Sería la única forma de dar sentido y utilidad a la disposición, pues de lo contrario habría que aceptar que se trata de una innecesaria repetición de la regla del artículo 2314.

(ii) La norma no se refiere a todo daño que haya sido causado por malicia o negligencia, sino a "todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona". La forma gramatical subjuntiva del verbo poder da cuenta de que algo sea posible y no de algo que sea completamente cierto. Se referiría a hechos que por sí solos son constitutivos de culpa.

(iii) Los ejemplos del 2329 darían cuenta de situaciones que por sí solas suponen la ocurrencia de un hecho negligente, como el que dispara un arma de fuego y hiere a alguien o quien remueve losas sin tomar precauciones.

(iv) La interpretación resultaría, se sostiene, coincidente con la "*experiencia y la razón*". Se atribuiría responsabilidad cuando el sentido común y la experiencia indican que el daño provocado en tales circunstancias usualmente se debe a culpa o dolo del que lo causa. Es lo que en el derecho anglosajón, naturalmente con una cultura judicial bastante distinta, se conoce con la expresión latina *res ipsa loquitur* ("dejad que las cosas hablen por sí mismas").

(v) La presunción de culpa por el hecho propio se justificaría por razones de economía procesal, pues sería preferible dar por probada la negligencia del demandado (y liberar a la víctima de esta prueba) si existen indicios que permiten inferir que lo más probable es que el daño se debe a su negligencia, aunque técnicamente sean insuficientes para construir una presunción judicial. Se evitaría así la denominada prueba diabólica.

8. Según esta interpretación, de seguirse este argumento la presunción provocaría los siguientes efectos:

(i) En su formulación clásica (Arturo Alessandri), se presumiría la culpa en todos aquellos casos en que el daño por su propia naturaleza o por las circunstancias se pueda imputar negligencia al agente.

La víctima no debería probar ni la culpa ni la relación causal, y sólo debería acreditar la existencia de un perjuicio. Ello llevaría a mejorar la situación de la víctima, que no debería en tales casos probar la culpa.

(ii) En su formulación moderna (Enrique Barros), la denominada presunción de culpabilidad por el hecho propio contemplaría dos casos: las actividades particularmente peligrosas y todos aquellos casos en que las circunstancias indican que *prima facie* el daño se debe a la negligencia de alguien.

En cuanto al primer caso, lo remonta a Carlos Ducci (choque de trenes), y señala que se acerca a hipótesis de responsabilidad estricta. En estas situaciones hay una elevada peligrosidad y probabilidad, frente a una escasa utilidad. Se presumiría la culpa (pone de ejemplo el N°1 del artículo 2329). Otro ejemplo, sería la quema de pastizales no autorizada.

El segundo grupo emanaría de una máxima de la experiencia, y operaría cuando el solo hecho del accidente podría ser indicio *prima facie* de la culpa de quien desarrolla la actividad. Es como se entiende, una utilización del *Res ipsa loquitur*, del *common law*. ¿Se trataría de una especie de culpa virtual? Sería necesario al menos que la cosa o situación se encuentre “en el control del demandado”. La presunción evitaría la prueba diabólica, pues el que tiene el control se encontraría en mejores condiciones de probarla. Se agrega un requisito sutil “que el accidente sea de aquellos que en el curso ordinario de los acontecimientos no ocurren en ausencia de negligencia”, y se da el ejemplo de los productos defectuosos.

Sin embargo, se reconoce que su aplicación indiscriminada podría minar las bases del régimen de responsabilidad por culpa probada, por lo que resulta necesario que las condiciones de aplicación y sus efectos sean justificados con cuidado por la jurisprudencia (Enrique Barros).

En todo caso, en su formulación moderna, se sostiene que su función sería establecer un principio de prueba o una apariencia de culpa, atenuando al menos formalmente su extensión más radical como presunción. Operaría mientras el demandado no de una explicación más razonable acerca de la fuente del daño.

Se reconoce finalmente que sus contornos deberían ser delineados por la jurisprudencia.

En apoyo de esta posición se utilizan algunos fallos de la primera mitad del siglo XX, relativo a actividades peligrosas, y unos contados fallos modernos sobre lo mismo, que son analizados en la segunda parte de esta exposición.

II. ARGUMENTOS PARA RECHAZAR LA PRESUNCIÓN GENERAL DE CULPA POR EL HECHO PROPIO

9. Un análisis de los argumentos utilizados por los defensores de esta teoría debe llegar a la conclusión, en mi opinión, que ella se funda sobre supuestos débiles y que su aplicación puede traer más riegos que sus anunciadas ventajas.

Conviene examinar por separado cada uno de esos argumentos (ya expuestos en la primera parte de este documento) y exponer las razones que llevan a sostener lo contrario.

(i) Argumento exegético. El carácter de regla general de clausura del artículo 2329. Única forma de dar sentido y utilidad a la disposición, pues de lo contrario habría que aceptar que se trata de una innecesaria repetición de la regla del artículo 2314.

Al respecto, cabe preguntarse lo siguiente: ¿Es suficiente esa razón para crear una institución de la envergadura de una presunción general por el hecho propio? ¿Acaso las instituciones o reglas civiles existen o se inventan para dar coherencia a las normas de un texto?

En verdad, el derecho civil está llamado a dar cuenta y resolver un estado de cosas, y no simplemente a perfeccionar teóricamente los sistemas para satisfacer a los juristas.

Muchas disposiciones civiles pierden coherencia por desuso, por innecesarias para el momento, porque cambiaron las costumbres, etcétera. Pero ello no puede justificar la invención de un instrumento tan radical como éste, para que recuperen u obtengan coherencia.

(ii) La norma no se refiere a todo daño que haya sido causado por malicia o negligencia, sino a "todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona". La forma gramatical subjuntiva del verbo poder da cuenta de que algo sea posible y no de algo que sea completamente cierto. Se referiría a hechos que por sí solos son constitutivos de culpa.

Sin duda, desde un punto de vista gramatical ello puede ser así. Sin embargo, eso nada nos dice acerca de la extensión que resulta conveniente dar a esta eventual presunción, a las hipótesis en que proceda, a sus condiciones de aplicación, a la extensión de sus efectos, etcétera. La construcción de una institución de esta naturaleza no puede fundarse únicamente en la forma verbal empleada en una regla.

(iii) Los ejemplos del artículo 2329 darían cuenta de situaciones que por sí solas suponen la ocurrencia de un hecho negligente, como el que dispara un arma de fuego y hiere a alguien o quien remueve losas sin tomar precauciones.

Sin embargo, todos los ejemplos se refieren a actividades o utilización de cosas peligrosas.

Así también otras situaciones que la jurisprudencia ha considerado comprendidas (que ya fueron citados), se refieren a actividades o utilización de cosas peligrosas: los derrumbes que durante la demolición de un edificio causan daños a terceros; la muerte de un transeúnte causada por una línea eléctrica extendida en condiciones peligrosas; el accidente provocado por un pozo descubierto sin señales de prevención; el volcamiento de un carro de ferrocarril por mal estado de la vía férrea.

(iv) La interpretación resultaría, se sostiene, coincidente con la “experiencia y la razón”. Se atribuiría responsabilidad cuando el sentido común y la experiencia indican que el daño provocado en tales circunstancias usualmente se debe a culpa o dolo del que lo causa. Es lo que en el derecho anglosajón, naturalmente con una cultura judicial bastante distinta, se conoce con la expresión latina res ipsa loquitur (“dejad que las cosas hablen por sí mismas”).

Puede ser, pero existen notables diferencias entre nuestros sistemas de derecho continental y el *common law*. Nociones como “experiencia” y “razón” tienen sentido en sistemas que trabajan sobre la base de precedentes que dan estabilidad y seguridad acerca de qué se va considerar como razonable según la experiencia.

En verdad, prácticas como éstas provienen de sistemas habituados a conferir otros poderes a los jueces. En nuestros sistemas jurídicos, lo razonable puede oponerse al

bienestar social. Y tales decisiones, en nuestros sistemas, pertenecen a los poderes políticos y no a los jueces.

Frente a esto, la presunción de culpa en comento pretende aplicarse en un medio jurisprudencial en Chile que se resiste a la sistematización y disciplina.

En nuestro país, una presunción tan amplia como la expuesta: ¿no se usaría para esconder dudas sobre la causalidad? ¿Cómo se controlaría? La jurisprudencia estima que las presunciones judiciales son cuestiones de hecho, por lo que en principio escaparía al control del recurso de casación (hay fallos excepcionales: cuando falta gravedad, precisión y concordancia).

(v) La presunción de culpa por el hecho propio se justificaría por razones de economía procesal, pues sería preferible dar por probada la negligencia del demandado (y liberar a la víctima de esta prueba) si existen indicios que permiten inferir que lo más probable es que el daño se debe a su negligencia, aunque técnicamente sean insuficientes para construir una presunción judicial. Se evitaría así la denominada prueba diabólica.

Este argumento no es lógico. En efecto, cómo podría “diabólica” esta prueba, si por otra parte en estos casos *prima facie*, a todas luces, parece existir culpa.

En verdad, las dificultades se producen cuando la culpa es difusa o la relación de causalidad lo es, situaciones que parecen no aludir los partidarios de esta presunción.

10. Por último, cabe destacar que los casos que la posición a favor de esta presunción de culpa por el hecho propio cita en apoyo de su doctrina, son típicamente casos que se dan en uso de cosas o en ejercicio de actividades peligrosas. La jurisprudencia nacional, cuando ha aceptado excepcionalmente esta presunción, no le ha dado el alcance amplio que sus partidarios pretenden, sino que precisamente la ha restringido a cosas y actividades peligrosas. Así se demuestra a continuación, separándolos entre los casos anteriores a 1950 y posteriores a esa fecha.

Los de antes de 1950:

(i) Se cita un caso en que los empleados de la municipalidad olvidaron reponer la tapa de un sumidero de aguas en el que efectuaban reparaciones, y que además carecía de señales para prevenir a los transeúntes, que se “hallan grave y constantemente expuestos atendida la ubicación de dicho sumidero”; la sentencia señala que a la corporación demandada “le afecta la presunción de culpa resultante del artículo 2329 del Código Civil”, y que el citado artículo “se anticipa a dar por establecida la concurrencia de los elementos necesarios para imponer dicha responsabilidad cada vez que una persona sufra un daño que constituya la razonable consecuencia de haberse ejecutado un hecho o dejado de cumplir un deber y tal acción u omisión es susceptible de perjudicar a terceros”, Corte de Valparaíso, 3.12.1948, confirmado por la CS [cas. fondo], 4.8.1952, RDJ, T. XLIX (1952), sec. 1ª, 281 (282).

(ii) Así también un caso de incendio de una viña situada en los márgenes de la línea férrea, donde a la Corte le bastó que “la Empresa no ha justificado que la locomotora llevara canastillo en condiciones de evitar que las chispas cayeran más allá, donde pudieron ocasionar perjuicios”, CS, 5.10.1929, RDJ, T. XXVII (1930), sec. 1ª, 557 (562); un antiguo caso similar, Corte de Santiago, 5.10.1904, RDJ, T. II (1905), sec. 2ª, 86;

Los casos nuevos:

(iii) Un caso en que una Compañía de Gas no adoptó los resguardos necesarios para evitar filtraciones de gas que terminaron por causar la muerte a tres personas, se fallo que “la Jurisprudencia de nuestros Tribunales ha sido reiterativa en cuanto a establecer una verdadera presunción de responsabilidad en el desarrollo de actividades peligrosas, concordando con la opinión de los tratadistas, como es el caso del profesor Ducci, y por ello el artículo 2329 es aplicable cada vez que una persona sufre un daño que constituye la razonable consecuencia de haberse dejado de cumplir un deber (como en el caso en estudio) y que tal omisión es susceptible de perjudicar a terceros”, Corte de Concepción, 4.11.1997, confirmada por la CS [cas. fondo], 3.11.1998, F. del M. 481 (1998), 2600 (2618).

(iv) En un fallo pronunciado en contra de la Municipalidad de Concepción, en que una persona tropezó con las baldosas de la acera de una calle que sobresalían varios centímetros, se resolvió que “en relación a las características, ya anotadas, de la

acerca en que acaeció el accidente del demandante, resulta indefectible que el hecho de haber mantenido la citada arteria en mal estado y sin resguardo alguno, es una circunstancia que por su naturaleza es susceptible de atribuirse a lo menos a culpa del agente, porque con un razonamiento medio no puede sino concluirse que el mismo estaba en situación de provocar caídas de los peatones y, por ende, denota sin duda culpabilidad del autor, o, lo que es lo mismo, se trata de un hecho de aquellos que provienen ordinariamente de negligencia. Esto no significa otra cosa, entonces, que en el caso sub júdice procedería aplicar la presunción de culpabilidad que establece el artículo 2329 del Código Civil”, Corte de Concepción, 25.1.2002, confirmada por la CS [cas. fondo], 7.5.2002, RDJ, T. XCIX (2002), sec. 5ª, 104 (111).

(v) “Cualquier perjuicio que provenga de haberse alterado el normal, rutinario y consecuencial desenvolvimiento de un determinado quehacer, trabajo o actividad, debe presumirse que proviene de dolo o culpa del agente...en materia de excavaciones profundas que se realizan para la construcción de edificios en zonas urbanas, sobre todo en los suelos adyacentes a una construcción, la normalidad está constituida por el hecho de que no se produzcan daños en las construcciones colindantes con la excavación y la anormalidad esté constituida por la producción de dichos daños...De esta manera, es posible presumir, al tenor de la norma descrita [artículo 2329], que si se produjo daño en la construcción de la demandante, es debido a que la Constructora demandada no actuó con la debida diligencia, debiendo ella probar que se adoptaron las medidas adecuadas según lo habría hecho aquel que debe imprimir a su actuar aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios”, Corte de Santiago, 7.9.2000, RDJ, T. XCVII (2000), sec. 2ª, 65 (66).

En este fallo, participó en el voto el recordado profesor Francisco Merino, partidario de la presunción.

(vi) Un caso en que en la ciudad de Concepción existía un hoyo profundo, contiguo a un colector de aguas lluvias, no existiendo ni protección ni señalización que advirtiera del peligro a los transeúntes, donde la Corte Suprema conociendo de un recurso de casación en el fondo sostuvo que “para rechazar el recurso bastaría tener en cuenta que la sentencia de primera instancia, que el fallo recurrido hizo suya al confirmarla, ha dado por establecida, a partir de los hechos referidos, una presunción de culpabilidad de la demandada por su hecho propio, según el artículo 2329 del Código Civil, que se

infiere de la circunstancia de haber tenido la municipalidad la acera en estado de causar peligro a quienes transitaban por ella (razonamientos undécimo y duodécimo, párrafos penúltimo y último). Sin embargo, el recurso no dio por infringida esa norma legal, de lo que ha de concluirse que aun sin perjuicio de las consideraciones siguientes relativas a las normas que se invocan como infringidas, el fallo recurrido puede ser sostenido subsidiariamente en el referido artículo 2329 del Código Civil", CS, 7.5.2001 RDJ, T. XCVIII (2001), sec. 1ª, 88 (90).

Se refiere a una actividad peligrosa, aludida por el CC. Pero más allá el redactor de este fallo es Enrique Barros, partidario de esta presunción, como se expuso.

(vii) Lo mismo ocurre con un fallo de 3 de mayo de 2001, CS (redactado también por Barros). De la circunstancia de haber quedado la casa de la demandante, a consecuencias de la pavimentación de la calle, en la situación de anegarse por el derrame de aguas lluvias, se infiere que la municipalidad no cauteló que en esas obras se observaran los estándares mínimos requeridos para prevenir el daño provocado, pues debe entenderse que pertenece a la función pública de las municipalidades evitar que un defecto tan evidente llegue a provocar perjuicios de la gravedad que se produjeron.

11. De lo expuesto, pareciera preferible reservar esta supuesta presunción de responsabilidad para actividades peligrosas, no sujetas a regímenes especiales, y en lo concerniente únicamente a ciertos deberes de "seguridad" del agente sobre algunas cosas o actividades, cuya lógica responde a las *obligaciones de resultado* del ámbito contractual. Los ejemplos que contiene el artículo 2329 constituyen hipótesis típicas de estas obligaciones de seguridad. La ventaja, en mi opinión, de esta posición, es que la responsabilidad respecto del manejo de una cosa es, por decirlo de algún modo, más aprehensible: es responsabilidad del dueño, o bien de quien la utiliza, o construye, etc. Varios de los criterios mencionados en los fallos citados (ej. control sobre la cosa) son los criterios típicos que se usan en el derecho comparado para determinar quién es el responsable por daños provocados por una cosa, y en particular tratándose de cosas peligrosas.

La formulación de esta presunción por el hecho propio me deja la sensación, de que su extensión a todos los ámbitos de la responsabilidad (ej. médicos, o hipótesis donde no

haya principalmente una cosa involucrada) puede, en mi opinión ser muy riesgosa. En el fondo, lo que me inquieta es abrir una puerta demasiado grande, donde los límites impuestos por los criterios que menciona no son demasiado categóricos y, por otra parte, la jurisprudencia chilena es demasiado indisciplinada como para respetarlos.